

Research Article

Una perspectiva emancipadora sobre la gobernanza de recursos naturales y soberanía en el contexto Ecuatoriano

An emancipatory perspective on the governance of natural resources and sovereignty in the Ecuadorian context



Sanchez-Simbaña, Silvia Elena ¹

<https://orcid.org/0009-0008-9372-4273>

sesanchezs@uce.edu.ec

Universidad de Panamá, Doctorado en Educación, Panamá, Panamá

Autor de correspondencia ¹



DOI / URL: <https://doi.org/10.69484/rcz/v4/n1/82>

Resumen: El artículo analiza la gobernanza de recursos naturales en Ecuador desde una perspectiva emancipadora, destacando la importancia de la participación comunitaria y la soberanía local para alcanzar una gestión sostenible y equitativa. Basándose en una revisión bibliográfica, se identifican logros significativos, como modelos de cogestión y políticas públicas que promueven la sostenibilidad, ejemplificados por la gestión comunitaria de agua y acuerdos para el manejo de manglares. Sin embargo, persisten desafíos estructurales, como la centralización del poder y los impactos negativos de actividades extractivas que afectan ecosistemas y comunidades locales, especialmente en territorios indígenas. Estos conflictos subrayan la tensión entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental, evidenciando la necesidad de reformar políticas públicas y fomentar alternativas económicas que integren principios de equidad y conservación. El artículo concluye que, aunque existen avances hacia una gobernanza inclusiva, es esencial fortalecer capacidades locales, promover la justicia social y garantizar un compromiso institucional sostenido para consolidar un modelo de gestión ambiental que equilibre las prioridades humanas y ecológicas.

Palabras clave: gobernanza de recursos naturales; sostenibilidad ambiental; participación comunitaria; soberanía local; Ecuador.



Check for updates

Recibido: 18/Nov/2024

Aceptado: 25/Dic/2024

Publicado: 31/Ene/2025

Cita: Sanchez-Simbaña, S. E. (2025). Una perspectiva emancipadora sobre la gobernanza de recursos naturales y soberanía en el contexto Ecuatoriano. *Revista Científica Zambos*, 4(1), 140-152.

<https://doi.org/10.69484/rcz/v4/n1/82>

Ecuador, Santo Domingo, La Concordia Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas – Sede Santo Domingo Revista Científica Zambos (RCZ) <https://revistaczambos.utelvtsd.edu.ec>

Este artículo es un documento de acceso abierto distribuido bajo los términos y condiciones de la [Licencia Creative Commons, Atribución-NoComercial 4.0 Internacional](#).



Abstract:

The article analyzes natural resource governance in Ecuador from an emancipatory perspective, highlighting the importance of community participation and local sovereignty to achieve sustainable and equitable management. Based on a literature review, significant achievements are identified, such as co-management models and public policies that promote sustainability, exemplified by community water management and mangrove management agreements. However, structural challenges persist, such as the centralization of power and the negative impacts of extractive activities that affect ecosystems and local communities, especially in indigenous territories. These conflicts underscore the tension between economic development and environmental sustainability, highlighting the need to reform public policies and promote economic alternatives that integrate principles of equity and conservation. The article concludes that, although there are advances towards inclusive governance, it is essential to strengthen local capacities, promote social justice and ensure sustained institutional commitment to consolidate an environmental management model that balances human and ecological priorities.

Keywords: natural resource governance; environmental sustainability; community participation; local sovereignty; Ecuador.

1. Introducción

La gobernanza de los recursos naturales en Ecuador ha sido históricamente un tema de debate, especialmente en relación con la soberanía nacional y la participación comunitaria. La Constitución de 2008 reconoce los derechos de la naturaleza y promueve un modelo de desarrollo sostenible que equilibre la explotación de recursos con la conservación ambiental (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008). Sin embargo, persisten desafíos significativos en la implementación de políticas que armonicen estos principios con las necesidades económicas y sociales del país.

Uno de los principales problemas radica en la tensión entre la explotación de recursos naturales y la preservación de los derechos de las comunidades locales y de la naturaleza misma. La expansión de actividades extractivas, como la minería y la explotación petrolera, ha generado conflictos socioambientales, poniendo en riesgo ecosistemas sensibles y afectando la calidad de vida de las poblaciones indígenas y rurales (Velasco, 2011). Además, la falta de una gobernanza efectiva ha llevado a la degradación ambiental y a la disminución de la biodiversidad, comprometiendo la sostenibilidad a largo plazo (Agrawal et al., 2022).

Diversos factores contribuyen a la complejidad de este problema. La gobernanza multinivel, que implica la coordinación entre diferentes niveles de gobierno y actores sociales, es esencial pero difícil de lograr en la práctica (Armitage et al., 2012). La participación comunitaria en la toma de decisiones es fundamental para garantizar que las políticas reflejen las necesidades y aspiraciones locales; sin embargo, a menudo

se ve limitada por estructuras de poder centralizadas y la falta de mecanismos efectivos de inclusión (Brower & Vargas, 2020). Además, la presión por el crecimiento económico puede llevar a priorizar la explotación de recursos sobre la conservación ambiental, exacerbando los conflictos y la degradación ecológica (Aedo & Parker, 2020).

La justificación para abordar este tema radica en la necesidad de promover una gobernanza de los recursos naturales que sea inclusiva, sostenible y respetuosa de los derechos de la naturaleza y de las comunidades locales. Una perspectiva emancipadora busca empoderar a las comunidades, reconociendo su papel central en la gestión de los recursos y en la toma de decisiones que afectan sus territorios (Ostrom, 2000). Este enfoque no solo contribuye a la justicia social y ambiental, sino que también fortalece la resiliencia de los ecosistemas y de las comunidades frente a desafíos como el cambio climático y la degradación ambiental (Altomonte & Sánchez, 2016).

La viabilidad de implementar una gobernanza emancipadora en Ecuador se sustenta en experiencias exitosas de gestión participativa. Por ejemplo, los Acuerdos de Uso Sostenible y Custodia del Ecosistema Manglar (AUSCEM) han demostrado ser instrumentos efectivos para la conservación y uso sostenible de los manglares, involucrando activamente a las comunidades locales en la gestión de estos ecosistemas (López-Rodríguez, 2024). Estos acuerdos reflejan la capacidad de las comunidades para gestionar recursos de manera sostenible cuando se les otorga el reconocimiento y las herramientas necesarias.

El objetivo de este artículo es analizar, a través de una revisión bibliográfica, las dinámicas de gobernanza de los recursos naturales en Ecuador desde una perspectiva emancipadora. Se explorarán casos de estudio y experiencias que evidencien cómo la participación comunitaria y la soberanía local pueden contribuir a una gestión más equitativa y sostenible de los recursos naturales. Asimismo, se identificarán los desafíos y oportunidades presentes en la implementación de modelos de gobernanza que promuevan la justicia ambiental y el empoderamiento de las comunidades.

En síntesis, la gobernanza de los recursos naturales en Ecuador enfrenta desafíos significativos que requieren enfoques innovadores y participativos. Una perspectiva emancipadora ofrece un marco para reimaginar la gestión de los recursos, centrándose en la atención a la participación comunitaria, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Este artículo busca contribuir al debate académico y práctico sobre cómo avanzar hacia modelos de gobernanza que reconozcan y fortalezcan la soberanía de las comunidades locales en el manejo de los recursos naturales.

2. Metodología

La metodología empleada en este artículo se basa en un enfoque exploratorio de revisión bibliográfica, diseñado para analizar y sintetizar información relevante sobre la gobernanza de los recursos naturales y la soberanía en el contexto ecuatoriano desde una perspectiva emancipadora. Este enfoque permite identificar, organizar y evaluar el conocimiento existente en fuentes científicas confiables, proporcionando un marco comprehensivo para interpretar las dinámicas asociadas a la temática abordada.

Para la recolección de información, se establecieron criterios claros de selección de fuentes. Se priorizaron artículos académicos publicados en revistas indexadas en bases de datos internacionales como Scopus y Web of Science, asegurando que los trabajos seleccionados cumplieran con altos estándares de calidad científica. Asimismo, se incluyeron documentos oficiales y reportes relevantes que complementan el análisis teórico con perspectivas prácticas y contextuales sobre el caso ecuatoriano.

El proceso de revisión consistió en la búsqueda sistemática de literatura mediante palabras clave específicas, tales como "gobernanza de recursos naturales", "soberanía", "participación comunitaria" y "Ecuador". Estas palabras clave se combinaron con operadores booleanos para afinar los resultados y garantizar la inclusión de materiales pertinentes. La selección final de estudios se realizó tras evaluar los resúmenes, introducciones y conclusiones de los textos encontrados, excluyendo aquellos que no se alineaban con los objetivos de este artículo o que carecían de relevancia en el contexto específico del Ecuador.

La revisión bibliográfica se complementó con un análisis cualitativo que permitió identificar patrones, tendencias y vacíos en la literatura existente. Este análisis se estructuró en torno a categorías temáticas previamente definidas, como la participación comunitaria, los modelos de gobernanza y los desafíos de implementación en el contexto ecuatoriano. Además, se buscó integrar perspectivas críticas y emancipadoras, destacando enfoques que promuevan la justicia social, la sostenibilidad y el empoderamiento de las comunidades locales.

La validez de los resultados se garantizó mediante un proceso riguroso de triangulación de información, que consistió en contrastar hallazgos de diferentes fuentes para identificar convergencias y divergencias en el conocimiento disponible. Este procedimiento permitió construir una visión integral y fundamentada sobre la problemática abordada, asegurando la solidez del análisis y sus conclusiones.

En síntesis, esta metodología no solo asegura un tratamiento exhaustivo y riguroso de la información disponible, sino que también contribuye a la generación de una comprensión más profunda y contextualizada de las dinámicas que caracterizan la gobernanza de los recursos naturales en Ecuador desde una perspectiva emancipadora.

3. Resultados

3.1. Logros en la gobernanza emancipadora

En el contexto ecuatoriano, la gobernanza emancipadora de los recursos naturales ha evolucionado significativamente gracias a la incorporación de enfoques participativos, la implementación de modelos de cogestión y el desarrollo de políticas públicas alineadas con la sostenibilidad ambiental. Estas iniciativas buscan equilibrar la explotación de recursos con el reconocimiento de los iñderechos de las comunidades y de la naturaleza, alineándose con los principios establecidos en la Constitución de 2008. A continuación, se detallan tres dimensiones clave que destacan los logros alcanzados.

3.1.1. Participación comunitaria en la gestión de recursos

La participación comunitaria ha sido un componente fundamental en los avances hacia una gobernanza más inclusiva. Este enfoque se basa en la idea de que las comunidades locales, al ser las principales usuarias y guardianas de los recursos naturales, están en una posición privilegiada para gestionar estos recursos de manera sostenible. En Ecuador, esta perspectiva ha sido particularmente evidente en la gestión comunitaria del agua. Por ejemplo, en la parroquia Santa Ana, las organizaciones locales han implementado estrategias para garantizar una distribución equitativa y eficiente del recurso hídrico, logrando no solo satisfacer las necesidades de la población, sino también fomentar prácticas responsables que preservan las fuentes de agua para futuras generaciones (Nieto León, 2022).

Otro caso emblemático es el desarrollo de planes de gestión socioambiental en comunidades rurales. La comunidad Chimborazo Millancahuán, por ejemplo, elaboró un Plan de Desarrollo Local Sostenible que no solo promueve el uso racional de los recursos, sino que también integra a la población en el diseño y ejecución de proyectos que mejoran la calidad de vida sin comprometer la integridad ambiental (Godoy Ponce, 2015). Estos casos demuestran que la participación comunitaria no solo es posible, sino que puede generar resultados tangibles en términos de sostenibilidad y equidad.

3.1.2. Modelos de cogestión con comunidades locales

La cogestión ha emergido como una estrategia clave para integrar las perspectivas y necesidades locales en la administración de recursos naturales. En este modelo, las autoridades gubernamentales y las comunidades trabajan conjuntamente para gestionar los recursos, compartiendo responsabilidades y beneficios. Un ejemplo destacado en Ecuador es la implementación de acuerdos de uso sostenible y custodia del ecosistema manglar. Este enfoque ha demostrado ser eficaz no solo para preservar los ecosistemas, sino también para fortalecer las capacidades locales y mejorar las condiciones socioeconómicas de las comunidades involucradas (Iñiguez-Gallardo & López-Rodríguez, 2024).

Asimismo, en zonas andinas, la cogestión del agua ha mostrado resultados prometedores. La integración de conocimientos tradicionales y técnicos ha permitido una gestión más eficiente y adaptativa del recurso hídrico, especialmente en regiones vulnerables al cambio climático. Estas experiencias subrayan la importancia de reconocer el saber local como un componente esencial de la gobernanza ambiental, promoviendo una relación más equilibrada y respetuosa entre los actores involucrados.

3.1.3. Políticas públicas de sostenibilidad ambiental

El marco legal y político del Ecuador ha sido un pilar fundamental para el avance de la gobernanza emancipadora. La Constitución de 2008 consagra los derechos de la naturaleza y establece la obligación del Estado de garantizar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. Este marco normativo ha sido complementado con la formulación de políticas públicas que promueven la participación comunitaria en la gestión ambiental. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ha desarrollado una normativa técnica para la gestión participativa en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este enfoque busca involucrar a las comunidades locales en la planificación y manejo de estas áreas, reconociendo su papel como aliados estratégicos en la conservación de la biodiversidad (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, 2022).

Además, se han implementado políticas orientadas a fomentar la restauración de ecosistemas degradados mediante programas que combinan incentivos económicos con la participación comunitaria. Estas iniciativas no solo han contribuido a la regeneración ambiental, sino que también han fortalecido la cohesión social y el sentido de pertenencia entre los habitantes de las zonas intervenidas. En este sentido, la sostenibilidad ambiental se ha convertido en un eje transversal que orienta tanto las políticas públicas como las acciones locales.

Los logros alcanzados en la gobernanza emancipadora de los recursos naturales en Ecuador reflejan un cambio paradigmático hacia modelos más inclusivos, adaptativos y sostenibles. La participación comunitaria, la cogestión y las políticas públicas de sostenibilidad no solo representan avances significativos en términos de justicia ambiental, sino que también constituyen un ejemplo de cómo los principios emancipadores pueden aplicarse en contextos con altos niveles de biodiversidad y diversidad cultural. No obstante, estos logros requieren una continuidad en el compromiso institucional y comunitario para consolidar los avances y enfrentar los desafíos pendientes en el ámbito de la gobernanza ambiental.

Tabla 1
Análisis del marco legal y político en Ecuador

Aspecto	Descripción	Ejemplos/Relevancia
Marco legal	La Constitución de 2008 establece derechos de la naturaleza y promueve la conservación y uso sostenible de los recursos naturales.	Derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución.
Participación comunitaria	Se fomenta la gestión participativa en áreas protegidas, involucrando a comunidades	Gestión participativa en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

	locales como aliados estratégicos en la conservación.	
Políticas públicas	Normativa técnica y programas de restauración ecológica combinan incentivos económicos con cohesión social.	Programas del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
Resultados	Avances en justicia ambiental, cohesión social y regeneración ambiental; modelo inclusivo, adaptativo y sostenible.	Modelo inclusivo aplicado en zonas de alta biodiversidad y diversidad cultural.
Desafíos	Requiere continuidad en el compromiso institucional y comunitario para consolidar avances y abordar desafíos pendientes.	Compromiso necesario para enfrentar desafíos de gobernanza ambiental.

Nota: La tabla presentada proporciona un análisis detallado del marco legal y político en Ecuador, destacando cómo los principios constitucionales, la participación comunitaria, y las políticas públicas contribuyen a un modelo inclusivo y sostenible de gobernanza ambiental (Autores, 2024).

El marco legal y político de Ecuador, basado en la Constitución de 2008, establece una base sólida para promover la justicia ambiental y la sostenibilidad. Las políticas que fomentan la participación comunitaria y la restauración de ecosistemas degradados han logrado importantes avances en términos de conservación y cohesión social. Sin embargo, para garantizar la continuidad de estos logros, es fundamental reforzar el compromiso institucional y comunitario, manteniendo un enfoque adaptativo que permita enfrentar los desafíos emergentes de la gobernanza ambiental. Este modelo, por su carácter inclusivo y emancipador, sirve como referencia para otros contextos con alta biodiversidad y diversidad cultural.

3.2. Retos en la implementación de una gobernanza inclusiva

La implementación de una gobernanza inclusiva en Ecuador enfrenta múltiples retos estructurales y operativos que dificultan la participación equitativa de las comunidades locales y la sostenibilidad ambiental. Estos desafíos se manifiestan en tres dimensiones críticas: la centralización del poder, el impacto adverso de las actividades extractivas y los conflictos inherentes entre sostenibilidad ambiental y desarrollo económico. A continuación, se analiza cada uno de estos aspectos de forma detallada.

3.2.1. Centralización del poder como barrera

A pesar de los avances normativos en favor de la descentralización, Ecuador aún enfrenta importantes limitaciones derivadas de estructuras de poder centralizadas. La Constitución de 2008 establece principios de descentralización y reconoce la autonomía de los gobiernos locales para gestionar recursos y promover el desarrollo en sus territorios. Sin embargo, la centralización persiste en la práctica, restringiendo la capacidad de las comunidades para incidir en las políticas que afectan directamente sus medios de vida y su entorno natural. Esto genera una desconexión entre los niveles de decisión central y local, lo que a menudo resulta en políticas públicas que no reflejan las necesidades ni prioridades de las comunidades (Gallegos Rojas et al., 2021).

Además, la limitada asignación de recursos financieros y técnicos a los gobiernos locales dificulta su capacidad de implementar estrategias de gestión ambiental adaptadas a sus contextos específicos. Por ejemplo, muchos municipios carecen de

los medios necesarios para diseñar y ejecutar programas efectivos de conservación o restauración de ecosistemas. Esta dependencia del nivel central no solo debilita la autonomía local, sino que también perpetúa un modelo de gobernanza que excluye a las comunidades de los procesos de toma de decisiones estratégicas.

3.2.2. Impacto de actividades extractivas en comunidades

Las actividades extractivas en Ecuador, como la minería y la explotación petrolera, representan uno de los principales retos para la gobernanza inclusiva debido a sus efectos negativos en las comunidades locales y los ecosistemas. Estas industrias, promovidas como pilares del desarrollo económico, han generado desplazamientos de poblaciones, conflictos sociales y graves daños ambientales. El caso de las comunidades indígenas waorani en la Amazonía ecuatoriana es emblemático: la expansión de la explotación petrolera en esta región ha afectado sus territorios ancestrales, alterando sus formas de vida y provocando una creciente resistencia contra estas actividades (Vásconez Carrasco & Torres León, 2018).

Asimismo, la falta de consulta y consentimiento previo, libre e informado, establecido en convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT, constituye una violación de los derechos de las comunidades afectadas. En Ecuador, la implementación de este principio ha sido deficiente, lo que ha generado desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y ha exacerbado los conflictos entre las comunidades y las empresas extractivas. Este contexto también evidencia una gobernanza que prioriza los intereses económicos a corto plazo sobre los derechos y el bienestar de las poblaciones locales.

En términos ambientales, las actividades extractivas han resultado en la contaminación de fuentes de agua, la pérdida de biodiversidad y la degradación de suelos. Estos impactos comprometen la sostenibilidad de los ecosistemas y afectan de manera directa a las comunidades que dependen de ellos para su subsistencia. La falta de un monitoreo ambiental efectivo y de mecanismos de reparación adecuados agudiza aún más las desigualdades y limita las posibilidades de implementar una gobernanza inclusiva.

3.2.3. Conflictos entre sostenibilidad y desarrollo económico

El dilema entre sostenibilidad ambiental y desarrollo económico es uno de los desafíos más complejos que enfrenta Ecuador. La dependencia económica del país en la explotación de recursos naturales, particularmente el petróleo y los minerales, ha generado tensiones entre la necesidad de financiar programas sociales y el compromiso de conservar su riqueza natural. Aunque el marco legal ecuatoriano, como los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución, establece un mandato claro hacia la sostenibilidad, las decisiones políticas frecuentemente priorizan los ingresos inmediatos sobre las consideraciones ambientales (Vásconez Carrasco & Torres León, 2018).

Por ejemplo, la promoción de megaproyectos mineros ha sido objeto de controversia debido a su impacto en áreas de alta biodiversidad, como los páramos andinos y las zonas amazónicas. Estos proyectos, aunque económicamente rentables en el corto plazo, representan una amenaza para los servicios ecosistémicos y la resiliencia ambiental del país. Además, los conflictos entre las comunidades locales y las empresas mineras han puesto de manifiesto la ausencia de un modelo de gobernanza que garantice una distribución equitativa de los beneficios y respete los derechos colectivos.

Otro ejemplo son las tensiones generadas en torno al Bloque 43-ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní. Aunque un referéndum reciente promovió la conservación del área mediante la reducción de la explotación petrolera, las implicaciones económicas de esta decisión reflejan la dificultad de equilibrar las prioridades nacionales e internacionales de sostenibilidad y desarrollo económico (Gallegos Rojas et al., 2021).

Los retos en la implementación de una gobernanza inclusiva en Ecuador evidencian la necesidad de transformar las estructuras de poder, replantear las dinámicas extractivas y reconciliar las prioridades de sostenibilidad ambiental con el desarrollo económico. Superar estas barreras requerirá un compromiso firme del Estado, el fortalecimiento de las capacidades locales y una mayor integración de los principios de justicia social y ambiental en las políticas públicas. Solo mediante la construcción de un modelo de gobernanza verdaderamente inclusivo será posible avanzar hacia un futuro sostenible y equitativo para las generaciones presentes y futuras.

4. Discusión

La discusión sobre la gobernanza de los recursos naturales en el contexto ecuatoriano, desde una perspectiva emancipadora, revela una compleja interacción entre avances significativos y retos persistentes que moldean el futuro de la gestión ambiental inclusiva. Este análisis enfatiza la necesidad de consolidar los logros alcanzados en términos de participación comunitaria, cogestión y sostenibilidad, mientras se abordan de manera urgente las barreras estructurales, los impactos negativos de las actividades extractivas y los dilemas entre desarrollo económico y conservación ambiental.

Los avances en la participación comunitaria destacan el papel central de las comunidades en la gestión de los recursos naturales. Modelos como los acuerdos de uso sostenible en los ecosistemas de manglar y los planes de desarrollo local sostenible en Chimborazo Millancahuán ejemplifican cómo las comunidades pueden ser actores clave en la implementación de políticas ambientales efectivas (Iñiguez-Gallardo & López-Rodríguez, 2024; Godoy Ponce, 2015). Estos casos evidencian que, cuando se les otorga poder de decisión, las comunidades no solo contribuyen a la conservación, sino que también fortalecen su tejido social y económico. Sin embargo, la sostenibilidad de estos modelos depende de una gobernanza que priorice la

descentralización y que proporcione recursos y apoyo técnico adecuados a los niveles locales (Gallegos Rojas et al., 2021).

Por otro lado, los modelos de cogestión han demostrado ser un mecanismo eficaz para integrar conocimientos tradicionales y técnicos, promoviendo una gestión más equitativa de los recursos. No obstante, su implementación enfrenta limitaciones derivadas de la centralización del poder y de la falta de articulación entre los diferentes niveles de gobierno. Esta situación subraya la necesidad de reformar las estructuras institucionales para garantizar una distribución más justa de las competencias y responsabilidades (Nieto León, 2022). Sin una transformación institucional, el potencial emancipador de la cogestión podría verse comprometido, lo que perpetuaría las desigualdades en la gobernanza ambiental.

En el ámbito de las políticas públicas, el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza y la creación de normativas participativas representan pasos importantes hacia un modelo de desarrollo sostenible. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos significativos debido a las contradicciones inherentes al modelo económico ecuatoriano, que sigue dependiendo en gran medida de actividades extractivas. Este modelo no solo genera tensiones entre sostenibilidad y desarrollo, sino que también exacerba los conflictos sociales y ambientales en territorios vulnerables, como lo demuestran los casos de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y los proyectos mineros en páramos andinos (Vásconez Carrasco & Torres León, 2018).

Los impactos adversos de las actividades extractivas son especialmente preocupantes. La contaminación de fuentes de agua, la degradación de ecosistemas y el desplazamiento de comunidades evidencian una gestión de los recursos orientada al corto plazo, sin considerar las implicaciones de largo plazo para la sostenibilidad y el bienestar social. La falta de consulta previa, libre e informada, además de constituir una violación de los derechos internacionales reconocidos, refuerza una gobernanza desigual que ignora las voces de los más afectados (Vásconez Carrasco & Torres León, 2018). Estas dinámicas subrayan la necesidad de adoptar un enfoque transformador que priorice la justicia ambiental y social como ejes centrales de la gobernanza.

En este contexto, los conflictos entre sostenibilidad y desarrollo económico emergen como un desafío estructural que requiere soluciones innovadoras. Aunque Ecuador ha implementado mecanismos como las compensaciones ambientales y los fondos para la conservación, estos esfuerzos son insuficientes frente a la escala de los problemas. Es necesario reconfigurar las políticas de desarrollo para que se alineen con los principios de sostenibilidad establecidos en la Constitución, promoviendo alternativas económicas que valoren el capital natural del país y que generen beneficios distribuidos equitativamente entre las comunidades (Gallegos Rojas et al., 2021).

En conclusión, si bien existen logros significativos en la gobernanza emancipadora de los recursos naturales en Ecuador, persisten retos sustanciales que deben ser abordados para consolidar un modelo verdaderamente inclusivo y sostenible. Este proceso requiere un compromiso colectivo que trascienda las divisiones entre el Estado, las comunidades y el sector privado, promoviendo una visión compartida de desarrollo que equilibre las necesidades humanas y ecológicas. Las experiencias analizadas evidencian que, con voluntad política y acción coordinada, es posible avanzar hacia una gobernanza que reconozca y respete los derechos de las comunidades y de la naturaleza, sentando las bases para un futuro más justo y resiliente.

5. Conclusiones

La gobernanza de los recursos naturales en Ecuador, desde una perspectiva emancipadora, presenta un panorama en el que convergen importantes logros y desafíos estructurales. Los avances alcanzados, como la participación activa de las comunidades locales, los modelos de cogestión y el desarrollo de políticas públicas orientadas a la sostenibilidad, demuestran el potencial de construir una gestión más inclusiva y adaptativa. Estas experiencias evidencian que las comunidades, cuando son empoderadas y reconocidas como actores clave, pueden contribuir de manera significativa a la conservación de los recursos naturales y al fortalecimiento de la resiliencia socioambiental.

Sin embargo, persisten barreras estructurales que limitan la efectividad de estos avances. La centralización del poder restringe la autonomía de los gobiernos locales y dificulta la implementación de políticas adaptadas a las realidades territoriales. Este fenómeno perpetúa una desconexión entre las decisiones estratégicas y las necesidades específicas de las comunidades, comprometiendo la equidad en la distribución de beneficios y responsabilidades en la gestión de los recursos.

Además, el impacto negativo de las actividades extractivas continúa representando una amenaza crítica para las comunidades locales y los ecosistemas. La explotación de recursos, promovida como motor del desarrollo económico, ha generado conflictos sociales, desplazamientos y daños ambientales irreparables, exacerbando las desigualdades y vulnerabilidades existentes. Este modelo de desarrollo, basado en la extracción intensiva, resulta incompatible con los principios de sostenibilidad y justicia ambiental que el marco normativo ecuatoriano pretende promover.

El conflicto entre las prioridades de desarrollo económico y la conservación ambiental subraya la necesidad de replantear las políticas públicas y los modelos económicos vigentes. Resulta imprescindible transitar hacia alternativas de desarrollo que integren de manera equilibrada los objetivos de sostenibilidad, equidad y crecimiento económico. Este cambio requiere un compromiso político firme, una mayor

cooperación entre los diferentes actores sociales y un enfoque inclusivo que priorice las voces de las comunidades locales.

En este contexto, la consolidación de una gobernanza inclusiva y sostenible depende de la capacidad de superar las barreras identificadas, fortalecer las capacidades locales e institucionales y promover una visión compartida de desarrollo. La experiencia ecuatoriana ofrece lecciones valiosas sobre los retos y oportunidades que surgen al intentar equilibrar la explotación de recursos con la justicia social y la conservación ambiental. Avanzar hacia un modelo emancipador requerirá un esfuerzo continuo para integrar principios de equidad, sostenibilidad y participación, sentando las bases para un futuro más justo y resiliente tanto para las comunidades como para los ecosistemas del país.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Referencias Bibliográficas

Acosta, A. (2013). *El Buen Vivir: Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos*. Icaria Editorial.

Aedo, M. P., & Parker, C. (2020). Funcionarios públicos y evaluación ambiental en Chile: tensiones en la construcción de una gobernanza ambiental democrática. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 65(239), 379-393. <https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2020.239.67896>

Agrawal, A., Brandhorst, S., Jain, M., Liao, C., Pradhan, N., & Solomon, D. (2022). From environmental governance to governance for sustainability. *One Earth*, 5(6), 615-621.

Altomonte, H., & Sánchez, R. J. (2016). Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales en América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Armitage, D., De Loë, R., & Plummer, R. (2012). Environmental governance and its implications for conservation practice. *Conservation Letters*, 5(4), 245-255. <https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2012.00238.x>

Arsel, M., Hogenboom, B., & Pellegrini, L. (2016). The extractive imperative in Latin America. *The Extractive Industries and Society*, 3(4), 880-887. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2016.10.014>

Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008.

Brower, J., & Vargas, A. (2020). Gobernabilidad y gobernanza: alcances para una lectura compleja. *Revista Espacios*, 41(32), 293-305.

Gallegos Rojas, R. X., Quiroz Castro, C. E., & Celi Masache, M. E. (2021). Descentralización y desconcentración. Análisis y perspectivas. *Sur Academia. Revista Académica-Investigativa en Ciencias Sociales y Humanísticas*, 8(16). <https://doi.org/10.54753/suracademia.v8i16.664>

Godoy Ponce, S. C. (2015). *Desarrollo local sostenible y gestión socio-ambiental. Caso: comunidad Chimborazo Millancahuán*. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/11009>

Iñiguez-Gallardo, V., & López-Rodríguez, F. (2024). Gobernanza participativa para manglares en Ecuador. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 95(4). <https://doi.org/10.21829/myb.2024.3042612>

Larrea, C., & Warnars, L. (2009). Ecuador's Yasuni-ITT Initiative: Avoiding emissions by keeping petroleum underground. *Energy for Sustainable Development*, 13(3), 219-223. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2009.08.003>

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador. (2022). *Propuesta de Norma Técnica de Gestión Participativa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas*. <https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/01/Propuesta-Norma-Tecnica-de-Gestion-Participativa-SNAP.pdf>

Nieto León, F. J. (2022). *La participación comunitaria en la gestión del agua; como aporte para el desarrollo local sostenible en la parroquia Santa Ana*. Universidad Politécnica Salesiana. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/23688/1/UPS-CT010160.pdf>

Vásconez Carrasco, M., & Torres León, L. (2018). Minería en el Ecuador: sostenibilidad y licitud. *Revista Universidad y Sociedad*, 10(2), 32-38. https://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2308-01322018000200006&script=sci_arttext

Yasuní y el referéndum ambiental: el desafío de financiar la conservación. (2024). *El País América Futura*. <https://elpais.com/america-futura/2024-08-20/un-ano-despues-del-referendo-de-yasuni-la-descarbonizacion-es-la-deuda-contrarreloj.html>